

Coyhaique, a veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

**VISTOS:**

En lo principal de la presentación de fecha 16 de enero de 2025, Ángela Eliana Valenzuela Cortés, ex funcionaria administrativa, domiciliada en Calle Padre Antonio Ronchi N°411, Villa La Tapera, comuna de Lago Verde, deduce recurso de protección en contra de la Municipalidad de Lago Verde, representada legalmente por su Alcaldesa, doña Claudia Andrea Valdés Vásquez, antropóloga, ambas con domicilio en calle Cacique Blanco N°131, comuna de Lago Verde, Región de Aysén o por quien la represente, reemplace o subrogue o haga las veces de tal, por haber incurrido en arbitrariedad e ilegalidad por medio de la dictación del Decreto Alcaldicio N°1072/1064, de fecha 27 de diciembre de 2024, todo lo cual vulnera, priva y perturba las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19° N°2 y 24 de la Constitución Política de la República, pidiendo en definitiva:

*“a) Que, se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1072/1064, de fecha 27 de diciembre de 2024, emitido por la ilustre Municipalidad de Lago Verde el cual dispuso el cese y/o la no renovación de mi contrata para el periodo 2025, por ser un acto arbitrario e ilegal; b) Que, se me reconozca mi legítimo derecho a que se me renueve o prorrogue mi Contrata, Estamento Administrativo, Grado 12° de la Escala Municipal de Sueldos, con una jornada semanal de 22 horas, en las mismas condiciones que tenía y por la misma anualidad o periodo que las anteriores renovaciones; c) Que, se ordene a la I. Municipalidad de Lago Verde, pagarme mis remuneraciones íntegras devengadas desde mi separación ilegal de mi cargo y funciones, esto es desde el*



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XRTVXTJDXZP

*mes de enero de 2025 hasta la fecha periodo de mi reincorporación efectiva al servicio; d) Que, se decreten las demás medidas que esta lltma. Corte estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar mis derechos cuya protección invoco en la presente Acción de Protección y; e) Que, se condene en costas a la Recurrida en caso de oposición.”.(sic)*

Con fecha 07 de febrero de 2025, la recurrida, informa el recurso de protección, solicitando que éste se rechace, con costas.

Con fecha 12 de marzo del año 2025, se ordenó traer los autos en relación.

Con fecha 21 de marzo de 2025, se procedió a la vista de la causa, alegando por el recurso, el abogado don Marcelo Rodríguez Avilés; quedando ésta en estado de acuerdo.

#### **CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, la recurrente fundamenta previamente que ingresó a prestar servicios para la recurrida el año 2012, bajo la figura de contratación a honorarios, hasta el año 2017, cumpliendo siempre la función de delegada municipal de Villa La Tapera. Añade que, desde el 01 de enero del año 2018 al 31 de diciembre del año 2024, se ha desempeñado bajo modalidad contractual de “a contrata”, en el Estamento Administrativo, en la labor antes referida, con una jornada semanal de 22 horas y que siempre ha sido calificada con nota sobresaliente y nunca he tenido una calificación deficiente.

Precisa que con fecha 28 de noviembre de 2024, y cumpliendo con sus expectativas, se le notifica de la carta de aviso de renovación de su contrata anual, para el periodo correspondiente para la anualidad 2025. Dicha carta de aviso, fue suscrita por la alcaldesa de Lago Verde doña Viviana Rivera



Peralta. En dicha misiva la autoridad comunal le señala expresamente que su contrata grado 12 sería renovada para el periodo anual 2025. Además, se le indica que para adoptar dicha decisión se tomó en especial consideración su buen desempeño laboral durante el 2024 y que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley N°18.883 Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales se ha decidido prorrogar su contratación y renovar la contrata bajo la cual se desempeña en el municipio, para el periodo comprendido entre 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Aclara que si bien la carta no es el decreto alcaldicio, con ello se daba cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República la cual dispone que las renovaciones y no renovaciones deben ser notificadas a los funcionarios con a lo menos 30 días antes del vencimiento del año en ejercicio.

Expone que con fecha 27 de diciembre de 2024, se dictó el Decreto Alcaldicio N°1072/1064, suscrito por la alcaldesa subrogante doña Andrea Morales Montecinos y por el Secretario Municipal Eduardo Vega Gaete, mediante el cual se dispone el cese de contrata por no ser necesarios sus servicios. Añade que esta causal de cese hace presumir un término de funciones a un contrato que se encuentra vigente o que tiene continuidad, y eso es indicativo que quizás si se emitió un acto administrativo que hubiese prorrogado mis servicios para el año 2025, aunque nunca se le notificó nada excepto la carta de renovación previamente analizada.

Precisa que el motivo real en que se funda el decreto alcaldicio para no renovar la contrata para el periodo o anualidad 2025, es la falta de confianza con la nueva alcaldesa, sin embargo



no es un cargo que represente al alcalde sino a la municipalidad y en ese contexto, el cargo de delegado municipal no es un cargo de exclusiva confianza del alcalde. Lo anterior se ve reafirmado, en la propia ley orgánica constitucional la cual señala precisamente cuales son los cargos de exclusiva confianza de la máxima autoridad municipal, dentro de los cuales no se encuentran los delegados municipales.

Señala que en el caso del delegado municipal si bien el alcalde puede nombrar a un funcionario y delegar en parte algunas de sus atribuciones, la permanencia del funcionario está sujeta a las normas comunes de los funcionarios a contrata en dicho municipio y deberá cumplir y respetar los requisitos legales y administrativos que imponen la leyes y la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de La República, dentro de los cuales existe respecto del funcionario la confianza legítima, a contar de 5 años de prestación ininterrumpida de sus funciones, en cuyo caso su no renovación o cese de funciones, sólo procede por destitución como medida disciplinaria o por una mala evaluación de desempeño que se vea reflejada en su proceso calificadorio, cuyo no es el caso, pues no ha tenido mala calificación de desempeño y posee confianza legítima por tener 7 años ininterrumpido de contratación a contrata.

Aclara que efectivamente, reúne todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Hacienda, por la Contraloría General de la República y por la amplia jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, para que se hubiese decretado o resuelto la prórroga de su contrata, en la Municipalidad de Lago Verde, en los mismos términos como venía prorrogándose desde el año 2018 en adelante, más aún cuando se trata de funciones permanentes para la institución, y hoy no sólo no se reconoce aquello, sino que



además se argumenta que sus servicios ya no son necesarios sin indicar un fundamento a su respecto, es decir, sin motivación ni argumentos facticos que hagan procedente un argumento en ese sentido y por otro lado argumentando que su cargo y función son de exclusiva confianza del alcalde, cosa que no se sostiene pues dichos cargos son creados por ley y se encuentran definidos en el artículo 38 de la ley 18.695 ya citada, dentro de los cuales no se encuentra el cargo de delegado municipal.

Indica que por todo lo expuesto, la decisión de no renovar su contrata en los mismos términos que venían produciéndose, manifestada en el Decreto Alcaldicio N°1072/1068, de 27 de diciembre de 2024, es arbitrario e ilegal. En términos generales, es arbitrario pues carece de razonabilidad y fundamentos suficientes, sin más fundamentación que los que ya he señalado. Además, es evidentemente ilegal porque infringe el artículo 11 de la Ley 19.880.

En cuanto a las garantías que estima vulneradas, se señala que la no renovación de su designación a contrata, en las mismas condiciones que venía renovándose sin expresión de fundamento racional, constituye una diferencia arbitraria y ha perturbado el legítimo ejercicio del derecho garantizado en el artículo 19 N°2 de nuestra Carta Fundamental. Agrega que el decreto alcaldicio impugnado, no se basta a sí mismo para justificar su dictación y menos para entender racionalmente porque dicha decisión debe afectarle y no a otro.

Finalmente, señala que el acto recurrido vulnera el derecho de propiedad sobre su cargo, en específico, sobre la estabilidad en su empleo y sus remuneraciones, consagrado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en este caso, queda establecido que su derecho a la propiedad sobre



el cargo y a la estabilidad en el empleo fue ilegal y arbitrariamente vulnerado, por las siguientes razones: accedió al cargo legalmente; en virtud de su desempeño se le debía renovar en las mismas condiciones que venía haciéndose en su cargo; su no renovación es ilegal y arbitraria como ya he señalado; no se consideró una causa legal justificante para ello; la argumentación respecto a que no goza de la confianza de la alcaldesa y por todos esos motivos queda claro que fue vulnerada en su garantía de derecho de propiedad sobre el cargo y su estabilidad en el empleo, pues tenía derecho a mantenerse como delegada municipal para todo el periodo 2025, cuestión que no se produce, por el acto recurrido es ilegal y arbitrario.

**SEGUNDO:** Que, la recurrida, evacuando su informe, solicita el rechazo de la acción con costas, fundado en que el Decreto Alcaldicio N°1072/1064, de fecha 27 de diciembre de 2024 y el oficio 727, de la misma fecha, consignó claramente en su texto los fundamentos legales que justificaron lo resuelto, a saber, que todos sus decretos de nombramiento señalan expresamente la vigencia por lo que fueron emitidos y “y/o mientras sean necesarios sus servicios”, decisión que corresponde a la facultad discrecional del jefe superior del servicio de la Municipalidad; que, el artículo 68 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, habilita a que los Alcaldes designen Delegados Municipales, los que en la especie deben contar con la confianza de éstos, por cuanto pasan a ser sus representantes en los lugares donde ejercen funciones; que, en consecuencia, éstas designaciones requieren que mantengan la confianza en el delegado, por cuanto, en la especie, actúan en representación de la más alta autoridad municipal, con especial atención, que la citada unidad municipal es una de las más



relevantes geográfica y estratégicamente (carretera austral), atiende mayor afluencia de público sobre todo en periodo estival; la funcionaria María Eliana Valenzuela Cortés, ejerce como Delegada en la localidad de Villa La Tapera, comuna de Lago Verde, quien no cuenta con la confianza de la suscrita jefa superior del municipio, situación que en cualquier caso es precisamente revisable a lo menos anualmente; a su turno, el artículo 2, incisos segundo y tercero de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, es claro en señalar que los cargos a contrata son esencialmente transitorios, y su renovación sólo procederá mediante la dictación de un acto administrativo que expresamente así lo disponga, resultando como consecuencia de la falta de aquel el resultado previsto por el legislador en términos de que se entenderá cesado por el solo ministerio de la ley; que, no consta que se haya dictado acto administrativo alguno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 18.695, que haya resuelto la extensión de la contratación referida, por lo que si bien, en la especie, ésta ya se tiene por terminada de pleno derecho a contar del día 31 de diciembre de 2024, se ha resuelto dictar Decreto Alcaldicio que así lo ratifique.

Señala que es un hecho reconocido por la recurrente en su recurso que sus contrataciones son de carácter anual, esto es, entre el 01 de enero de cada año hasta el día 31 de diciembre de dicha anualidad. Que, se ha señalado en el acto administrativo notificado se han invocado todas las normas legales que permiten expresamente poner término a las contrataciones en especial el citado artículo 2 de la Ley N°18.883. Agrega que por lo tanto, la cita de la mencionada norma autoriza a la Municipalidad para que solo pueda contratar a funcionarios a un plazo determinado que no



exceda un año calendario, cuya duración debe alcanzar como máximo el 31 de diciembre de cada año y que, si no media renovación, el personal a contrata cesará en sus funciones por el solo ministerio de la ley, la norma no obliga en absoluto a la Municipalidad a prorrogar las contrataciones de los funcionarios, por lo tanto, disponer su no renovación de ninguna forma constituye un acto ilegal.

Por todo lo dicho, además, tampoco considerarse que se ha vulnerado el principio de confianza legítima, ya que el Nuevo Instructivo sobre Confianza Legítima en las Contratas, emitido por la Contraloría General de la República el 17 de noviembre de 2021, señala en su número II: “Cabe destacar que los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades competentes en torno a las contrataciones -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera expresa en la causa O-1578-2021, Juzgado de Garantía de San Fernando. jurisprudencia vigente sobre la materia, según aparece de los dictámenes N° 12.421, 28.530 y 33.999, todos de 2017, de este origen. El mismo razonamiento es aplicable a las renovaciones dispuestas en términos diferentes, por ejemplo, rebajando el grado asimilado de la contrata o reduciendo las horas asignadas en la designación anterior. En efecto, los aludidos pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado.”.





Finalmente expone que, es innegable que la recurrente no tiene un derecho de carácter indubitado que haya sido vulnerado, por lo tanto, es absolutamente necesario que un juicio de lato conocimiento sobre estos hechos determine el derecho de la recurrente sobre la contrata que no fue renovada. De hecho, precisamente para estos casos la ley N°18.883, aplicable a los funcionarios municipales, estableció en su artículo 156 un procedimiento de reclamación ante la Contraloría General de la República, el cual constituye una instancia mucho más apta que esta para discutir sobre la legalidad de la resolución materia de estos autos.

**TERCERO:** Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°,12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.”

**CUARTO:** Que, como lo ha sostenido reiteradamente la Excm. Corte Suprema, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 antes transcrito, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y



derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

**QUINTO:** Que, como aparece de su propia definición, es requisito sine qua non de esta acción cautelar, la existencia de un acto u omisión ilegal – es decir, contrario a la ley -, o arbitrario, - esto es, producto del mero capricho de quien lo comete - y que, como consecuencia del mismo afecte, una o más de las garantías preexistentes y protegidas por el constituyente, lo cual será fundamental para la decisión por parte del tribunal ante el cual se interpone el referido arbitrio.

**SEXTO:** Que, el recurrente ha hecho consistir el acto arbitrario o ilegal, en el Decreto Alcaldicio N°1072/1064, de 27 de diciembre de 2024, de la Municipalidad de Lago Verde, en virtud del cual se decidió no renovar su contratación para el año 2025, por estimarlo infundado, ya que su cargo no es de exclusiva confianza y operó el principio de confianza legítima, afectando con ello las garantías contempladas en el artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

**SÉPTIMO:** Que, de los antecedentes que obran en estos autos, apreciados de conformidad a las reglas de la sana crítica, se pueden establecer los siguientes hechos:

1.- Que doña Angela Eliana Valenzuela Cortés, prestó servicios como Delegada Municipal de Villa la Tapera, de la Municipalidad de Lago Verde, bajo la modalidad de “contrata”, grado 12, del estamento administrativo, con una jornada semanal de 22 horas, desde enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2024, mediante la renovación anual y sucesiva de sus contrata.



2.- Mediante carta de 28 de noviembre de 2024, doña Viviana Rivera Peralta, Alcaldesa de la Municipalidad de Lago Verde, informa a la recurrente que atendido su buen desempeño laboral, se ha decidido prorrogar su contratación bajo la cual se desempeña en el municipio para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

3.- Por Decreto Alcaldicio N°1072/1064, de 27 de diciembre de 2024, suscrito por la alcaldesa subrogante de la Municipalidad de Lago Verde, doña Andrea Morales Montecinos y por el Secretario Municipal Eduardo Vega Gaete, se dispone cese de contrata respecto a doña Angela Eliana Valenzuela Cortés por no ser necesarios sus servicios, en atención a los siguientes considerandos:

“PRIMERO: Que, consta que doña Angela Eliana Valenzuela Cortés, registra nombramientos como funcionaria a Contrata de la Municipalidad de Lago Verde, conforme siguiente registro: Decreto 28 de fecha 11 de enero de 2018; Decreto 10 de fecha 03 de enero de 2019; Decreto 009 de fecha 03 de enero de 2020; Decreto 008 de fecha 04 de enero de 2021; Decreto 006 de fecha 04 de enero de 2022; Decreto 021 de fecha 05 de enero de 2023, y Decreto 004 de fecha 02 de enero de 2024. Es del caso destacar que todos sus decretos de nombramiento señalan expresamente la vigencia por lo que fueron emitidos y “y/o mientras sean necesarios sus servicios”, decisión que corresponde a la facultad discrecional del jefe superior del servicio de la Municipalidad.

SEGUNDO: Que, el artículo 68 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, habilita a que los Alcaldes designen Delegados Municipales, los que en la especie deben contar con la confianza de éstos, por cuanto pasan a ser



sus representantes en los lugares donde ejercen funciones. Dicha norma señala en su tenor literal: “Artículo 68.- El alcalde podrá designar delegados en localidades distantes de la sede municipal o en cualquier parte de la comuna, cuando las circunstancias así lo justifiquen. Tal designación podrá recaer en un funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 73 y no estén en la situación prevista por el inciso tercero del artículo 59.

Si la designación recayere en un funcionario de la municipalidad, éste ejercerá su cometido en comisión de servicios; si fuere designada una persona ajena a aquélla, podrá ser contratada a honorarios o se desempeñará ad honórem, según se establezca en la respectiva resolución, quedando afecta a las mismas responsabilidades de los funcionarios municipales.

La delegación deberá ser parcial y recaer sobre materias específicas. En la resolución respectiva el alcalde determinará las facultades que confiere, el plazo y el ámbito territorial de competencia del delegado.

La designación de los delegados deberá ser comunicada por el alcalde al delegado presidencial provincial respectivo.

TERCERO: Que, en consecuencia, éstas designaciones requieren que mantengan la confianza en el delegado, por cuanto, en la especie, actúan en representación de la más alta autoridad municipal.

CUARTO: Que, la funcionaria María Eliana Valenzuela Cortés, ejerce como Delegada en la localidad de Villa La Tapera, comuna de Lago Verde, quien no cuenta con la confianza de la suscrita jefa superior de este municipio, situación que en cualquier caso es precisamente revisable a lo menos anualmente, conforme se razona a continuación.



QUINTO: Que, consta dictamen N° E561358N24, de fecha 06 de noviembre de 2024, de Contraloría General de la República, señaló en su tenor literal: “N° E561358 Fecha: 06-XI-2024 Conforme lo han determinado los dictámenes N°s. 22.766 y 85.700, ambos de 2016, 6.400, de 2018 y E156769, de 2021, todos de esta Contraloría General, las continuas renovaciones de las contrataciones -desde la segunda al menos-, generan en los servidores la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro.

En similar sentido se pronunció la Excma. Corte Suprema en las causas roles N°s 38.681-2017, 15.122-2018 y 161.254-2022, entre otras, en orden a que el plazo necesario para dar lugar a la confianza legítima, en el caso de las personas designadas a contratar, era de dos años.

Sin embargo, con posterioridad ese Tribunal Superior de Justicia, en un criterio unificador de su jurisprudencia, ha sostenido en las causas roles N°s 26.112-2023, 26.131-2023, 26.196-2023, 6.279- 2023 y 26.301-2023, entre otras, que el referido principio opera después de cinco años de servir en la apuntada modalidad. En el mismo sentido se ha concluido en fallos más recientes, como ocurre, por ejemplo, con las causas roles N°s 26.112, 26.131, 26.196, 26.279 y 26.301, todas de 2023, de la Excma. Corte Suprema.

En dicho contexto, es menester recordar que el inciso tercero del artículo 6° de la ley N°10.336, prevé que esta Institución Fiscalizadora no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que hubieren sido sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia.



Al respecto, debe anotarse que el solo hecho de tratarse de aspectos susceptibles de ser debatidos en sede judicial no constituye un fundamento para atribuirle necesariamente tal carácter, comoquiera que, en definitiva, toda cuestión puede ser objeto, eventualmente, de discusión en el ámbito jurisdiccional (aplica dictamen N° E417326, de 2023, de este origen).

No obstante, atendido el actual y reiterado criterio de la Excma. Corte Suprema y lo planteado por la jurisprudencia administrativa de esta Contraloría General, antes citada, en relación con el plazo de la vinculación funcional que daría origen a la confianza legítima, se advierte que tal materia devino en litigiosa.

Ello, toda vez que, por una parte, la pretensión de los recurrentes en este tipo de asuntos es que se declare que a su respecto se ha configurado la confianza legítima, atendido el lapso de su desempeño a contrata, y por otra, que las respectivas entidades públicas han entendido, en contrapartida, que a dichos servidores no les asiste tal protección, dando lugar a una controversia cuya resolución compete a los Tribunales de Justicia, lo cual se confirma, además, por las múltiples acciones jurisdiccionales intentadas y actualmente en curso.

De este modo, y teniendo presente lo dispuesto en el citado artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336, que impide a esta Entidad Fiscalizadora emitir pronunciamiento en aquellos casos en que se plantea un asunto de naturaleza litigiosa, corresponde que, en lo sucesivo, se abstenga de resolver sobre la apuntada materia. Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez Contralora General de la República

SEXTO: Teniendo a la vista lo anterior, se ha regresado al criterio original, conforme al espíritu de la Ley 18.695, en orden



a que las Contratas Municipales, pueden contratarse como máximo durante un año calendario, esto es desde el 01 de enero al 31 de diciembre de cada año, y su eventual renovación requiere expresamente un acto administrativo que así lo avale, y la carencia de ello genera la ineludible consecuencia de que ésta se da por terminada al fin del respectivo año, si es que ésta hubiere sido aprobada hasta el 31 de diciembre, no procediendo en ningún caso renovaciones automáticas, máxime que el propio artículo 40 inciso segundo es claro en el sentido que las dotaciones A Contrata del Municipio son revisables a lo menos anualmente.

SÉPTIMO: Que, A su turno, el artículo dos incisos segundo y tercero de la Ley 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, es absolutamente claro en señalar que los cargos A Contrata son esencialmente transitorios, y su renovación sólo procederá mediante la dictación de un acto administrativo que expresamente así lo disponga, resultando como consecuencia de la falta de aquel el resultado previsto por el legislador en términos de que se entenderá cesado por el solo ministerio de la ley, conforme se transcribe a continuación: “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios.

Los empleos a contrata durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos.

OCTAVO: Que, no consta que se haya dictado acto administrativo alguno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo



12 de la Ley 18.695, que haya resuelto la extensión de la contratación A Contrata referida, por lo que si bien, en la especie, ésta ya se tiene por terminada de pleno derecho a contar del día 31 de diciembre de 2024, se ha resuelto dictar Decreto Alcaldicio que así lo ratifique.”.

**OCTAVO:** Que, al efecto, se debe tener presente la normativa atinente, a saber:

La letra c) del artículo 3 de la Ley 18.883, que Aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que: “Empleo a contrata: Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.”.

Por su parte el artículo 47 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que: “Tendrán la calidad de funcionarios de exclusiva confianza del alcalde, las personas que sean designadas como titulares en los cargos de secretario comunal de planificación, y en aquellos que impliquen dirigir las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario.”.

La letra c) y e) del artículo 63, de la misma ley, señala que: “El alcalde tendrá las siguientes atribuciones:

c) Nombrar y remover a los funcionarios de su dependencia de acuerdo con las normas estatutarias que los rijan;

e) Administrar los recursos financieros de la municipalidad, de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado.”

A su turno, el artículo 68 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, preceptúa que: “El alcalde podrá designar delegados en localidades distantes de la sede municipal o en cualquier parte de la comuna, cuando las circunstancias así lo justifiquen. Tal designación podrá recaer en





un funcionario de la municipalidad o en ciudadanos que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 73 y no estén en la situación prevista por el inciso tercero del artículo 59.

Si la designación recayere en un funcionario de la municipalidad, éste ejercerá su cometido en comisión de servicios; si fuere designada una persona ajena a aquélla, podrá ser contratada a honorarios o se desempeñará ad honórem, según se establezca en la respectiva resolución, quedando afecta a las mismas responsabilidades de los funcionarios municipales.

La delegación deberá ser parcial y recaer sobre materias específicas. En la resolución respectiva el alcalde determinará las facultades que confiere, el plazo y el ámbito territorial de competencia del delegado.

La designación de los delegados deberá ser comunicada por el alcalde al delegado presidencial provincial respectivo.”.

Finalmente el inciso 1 del artículo 89, de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, mandata que: “Todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo y a ascender en el respectivo escalafón, salvo los cargos de exclusiva confianza; participar en los concursos; hacer uso de feriados, permisos y licencias; recibir asistencia en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, y a participar en las acciones de capacitación, de conformidad con las normas del presente Estatuto.”.

**NOVENO:** Que, en cuanto a la eventual ilegalidad de la resolución en cuestión, no aparece discutido que la decisión se encuentra dentro del marco de las atribuciones de la recurrida, de acuerdo con lo dispuesto en la letra c) del artículo 63 de la Ley



18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, de modo que dicho acto no es ilegítimo o ilegal desde este punto de vista, ya que se procedió por quien estaba facultado para hacerlo y en el marco de sus atribuciones legales.

**DÉCIMO:** Que, primeramente, se debe dilucidar, la naturaleza del cargo de delegado municipal que sirve la recurrente, debiendo tener presente que el artículo 68 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que el alcalde podrá designar delegados en localidades distantes de la sede municipal o en cualquier parte de la comuna, cuando las circunstancias así lo justifiquen.

En este orden de ideas, cabe señalar, que la calidad de exclusiva confianza de un cargo público sólo puede ser atribuido por ley, desde que se trata de un régimen extraordinario que modifica la regla general de propiedad en el cargo y estabilidad en el empleo, consagrado en el inciso 1 del artículo 89, de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, así como mantiene un régimen especial de terminación de los servicios, por lo que en la materia que nos convoca el artículo 47 de la citada Ley 18.695, antes transcrito, establece claramente que son funcionarios de exclusiva confianza del alcalde solamente el secretario comunal de planificación y los directores de las unidades de asesoría jurídica, de salud y educación y demás incorporados a su gestión, y de desarrollo comunitario, por ende, se excluye al delegado municipal.

**UNDÉCIMO:** Que, entonces, siendo un hecho no discutido que la recurrente fue designada para desempeñar el cargo de delegada municipal de la Tapera, de la Municipalidad de Lago Verde, resulta forzoso concluir que ésta nunca detentó la calidad de funcionario de exclusiva confianza como fundamenta el



acto recurrido, por no encontrarse tal función en la hipótesis que prevé el artículo 47 antes citado, razón por la cual al considerar a la actora en tal calidad en el decreto alcaldicio recurrido, sin existir norma legal que la sustentare, aparece que el referido acto administrativo deviene en arbitrario e ilegal, desde que atribuye a la recurrente una calidad que nunca detentó, modificando de manera injustificada su régimen de terminación de sus servicios, afectando su derecho a la estabilidad en el empleo.

**DUODÉCIMO:** Que, a mayor abundamiento, esta Corte estima que la recurrente se encuentra amparada por el principio de confianza legítima, de acuerdo a la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, a partir de la sentencia dictada con fecha 31 de marzo de 2023, en causa Rol N° 26.301-2023, en la que estimó necesario proceder a una revisión los fallos uniformes emitidos hasta ese entonces al resolver recursos de protección que dicen relación con esta materia, señalando en lo pertinente lo siguiente:

“Décimo: Que, entonces, resulta imprescindible establecer desde cuando la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado. Pues bien, en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el



inicio del vínculo con la Administración. Lo anterior es coherente, además, con la política de renovación de contratas del personal del poder judicial, que es un criterio que ha sido sistemáticamente aplicado al interior de este poder del Estado, que tiene su sustento en el Acta 19-2012, refundida por el Acta 191-2019, que establece una renovación automática de la designación de los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo.”

**DÉCIMO TERCERO:** Que, entonces, aparece claramente que doña Angela Eliana Valenzuela Cortés, se ha desempeñado en funciones propias de contrata por siete años, esto es, desde enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2024, generándose una expectativa fundada de que ésta será prorrogada o renovada, de modo que se encuentra protegida por el principio de confianza legítima y por ello “sólo se puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.”, de acuerdo a la jurisprudencia citada en el motivo inmediatamente precedente, por lo que no habiéndose desvinculado a la recurrente por estos motivos, tal decisión aparece infundada, tornándose por ello arbitraria e ilegal .

**DÉCIMO CUARTO:** Que, en consecuencia, la resolución administrativa impugnada mediante esta acción de protección, surge del todo ilegal, desde que al ser infundada, según ante se indicó, infringe los artículos 11 y 41, ambos de la Ley 19.880; como asimismo aparece arbitraria, desde que previamente a la dictación del acto recurrido, se le notificó una carta de 28 de noviembre de 2024, emitida por doña Viviana



Rivera Peralta, Alcaldesa de la Municipalidad de Lago Verde, mediante la cual se le informa a la recurrente que atendido su buen desempeño laboral, se ha decidido prorrogar su contratación bajo la cual se desempeña en el municipio para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2025, sin que por su parte se incluya en el acto posterior que pone término a la contrata, alguna mención a esta misiva, en orden a dejarla sin efecto, esgrimiendo antecedentes comprobables que controviertan su buen desempeño laboral que sirvió justamente como fundamento de la referida carta de aviso de renovación.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, de este modo, la actuación de la recurrida infringe el derecho a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al ser discriminada arbitrariamente por no contar con la “confianza” de la máxima autoridad comunal, en comparación a otros empleados contrata, sin perjuicio de que el deber de motivación del acto administrativo debe emplearse para todas las personas que se encuentren en la misma situación y en el presente caso ello no se cumple.

Igualmente se ha vulnerado el derecho de propiedad, estatuido en el artículo 19 N°24 de nuestra Carta Magna, desde que priva de manera ilegítima a la recurrente de las remuneraciones a las que tenía derecho a percibir durante su desempeño laboral.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, entonces, habiéndose incurrido por la recurrida en un acto arbitrario e ilegal que priva a la recurrente de las garantías constitucionales señaladas, se deberá acoger el presente recurso de protección de la manera en que se dirá.



Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 20, de la Constitución Política de la República y Auto Acordado, de 24 de Junio del año 1992, de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones, **SE ACOGE**, con costas, el recurso de protección deducido por doña Ángela Eliana Valenzuela Cortés, en contra de la Municipalidad de Lago Verde representada legalmente por su Alcaldesa, doña Claudia Andrea Valdés Vásquez, y, en consecuencia, se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio N°1072/1064, de fecha 27 de diciembre de 2024, mediante la cual la recurrida dispuso no renovar para el periodo 2025 su nombramiento a contrata, como asimismo se ordena el reintegro inmediato a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas durante el tiempo que la recurrente ha estado separado de su cargo hasta su efectiva reincorporación, debiendo la recurrida disponer la inmediata renovación de su contrata por todo el año 2025.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del señor Ministro Titular don José Ignacio Mora Trujillo.

Rol N°19-2025.-



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XRTVXTJDXZP

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Coyhaique integrada por Ministro Presidente Pedro Alejandro Castro E. y los Ministros (as) Jose Ignacio Mora T., Natalia Rencoret O. Coyhaique, veintisiete de marzo de dos mil veinticinco.

En Coyhaique, a veintisiete de marzo de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XRTVXTJDXZP